

Santiago, cuatro de octubre de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 483-A del Código del Trabajo, se ordenó dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandada contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que rechazó el de nulidad que interpuso con la finalidad de invalidar la de base que acogió la demanda de declaración de relación laboral y la subsidiaria de despido injustificado y cobro de prestaciones.

Segundo: Que el recurso de unificación de jurisprudencia, es susceptible de ser deducido contra la resolución que falle el de nulidad, estableciéndose su procedencia para el caso en que *“respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”*, conforme lo explicita el artículo 483 del Código del Trabajo. Asimismo, de su artículo 483-A, se desprende que esta Corte debe controlar en la admisibilidad, su oportunidad, la existencia de fundamento, además de una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia, sostenidas en diversos fallos emanados de los Tribunales Superiores de Justicia, y finalmente, debe acompañarse copia del o los fallos que se invocan como fundamento del arbitrio en referencia.

Tercero: Que, conforme se indica en el recurso, la materia de derecho que se propone uniformar consiste en *“la contratación a honorarios en la hipótesis del inciso 2º del artículo 4 de la Ley N° 18.883 “del cometido específico” como supuesto independiente de la no habitualidad y accidentabilidad a que se refiere el inciso 1º de la misma norma”*.

Cuarto: Que, con relación al tema jurídico planteado para ser uniformado, se ofreció a modo de contraste, en primer lugar, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en los autos Rol N° 335-17, en que se estableció que el actor fue contratado para funciones específicas asociadas a un programa gubernamental de carácter nacional, con objetivos concretos y cuya realización se logra a través de planes precisos, las que deben, por tanto, ser subsumidas en el artículo 4º inciso 2º de la Ley N° 18.833.

Y, en segundo lugar, aparejó la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en el Rol N° 991-2017, en que igualmente se resolvió



que el actor se desempeñó mediante contratos a honorarios entre mayo de 2015 a diciembre de 2016, como diseñador gráfico para la ejecución de un programa adscrito al Departamento de Diversidad y no Discriminación de la municipalidad demandada, labores que son susceptibles de encuadrar en la forma del “cometido específico”, como quiera que tuvieron por objeto una labor precisa y determinada, vinculada a su especialidad, que no integra la estructura institucionalizada o generalmente conocida de las corporaciones municipales.

Quinto: Que, como se señaló, para la procedencia del recurso en análisis, es requisito esencial que existan distintas interpretaciones respecto de una determinada materia de derecho, es decir, que, frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se arribe a concepciones o planteamientos jurídicos disímiles que denoten una divergencia que deba ser uniformada. Así, la labor que corresponde a esta Corte se vincula con el esclarecimiento del sentido y alcance que tiene la norma que regla la controversia al ser enfrentada con una situación equivalente resuelta en un fallo anterior en sentido diverso, para lo cual es menester partir de presupuestos fácticos análogos entre el impugnado y los traídos como criterios de referencia.

Sexto: Que a la luz de lo expuesto y realizado el examen descrito, tal exigencia no aparece observada aquí, desde que la situación resuelta en esta causa no es equiparable con la que sustentan los fallos de contraste, puesto que, como se advierte de su sola lectura, la decisión que ahora se impugna, estableció que el actor se desempeñó en forma ininterrumpida por alrededor de nueve años en funciones propias de la entidad edilicia demandada, esto es, labores de jardinería, mantenimiento de plazas y parques de la municipalidad, con remuneración mensual, jornada de trabajo e instrucciones directas tanto del alcalde como de la jefa de aseo y ornato, indicios de laboralidad que dieron cuenta de una relación de naturaleza laboral, con las características previstas en el artículo 7 del Código del Trabajo, por lo que no pueden incluirse dentro del concepto de cometido específico. Sin embargo, los pronunciamientos contenidos en las sentencias que fueron acompañadas se sustentan en razonamientos distintos, los que dicen relación con la aplicación del artículo 4 inciso 2° de la Ley N° 18.883 respecto de vinculaciones entre personas naturales y las municipalidades demandadas, para la realización de labores adscritas a un programa determinado, que no forman parte de las funciones propias de las



demandadas, sino que dan cuenta del desarrollo de labores precisas y determinadas que corresponde calificarlas como cometidos específicos.

Séptimo: Que, por lo anteriormente expuesto, debe ser decretada la inadmisibilidad del recurso interpuesto por el demandado, puesto que la necesidad de uniformidad de la materia y la disparidad de decisiones respecto de la misma, que la ley exige y que se proponen como argumento para sostenerlo, no se advierte concurrente, teniendo además presente, el carácter excepcional y especial de este arbitrio, reconocido expresamente por el artículo 483 del Código del Trabajo.

Por estas consideraciones y normas citadas, se declara **inadmisible** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto contra la sentencia veinticuatro de junio de dos mil veintidós.

Regístrese y devuélvase.

Nº 46.636-2022.-



Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Ricardo Blanco H., Maria Gajardo H., Diego Gonzalo Simpertigue L. y los Abogados (as) Integrantes Ricardo Alfredo Abuaud D., Carolina Andrea Coppo D. Santiago, cuatro de octubre de dos mil veintidós.

En Santiago, a cuatro de octubre de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

